

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**



**SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**  
**Medellín, veintisiete (27) de febrero de dos mil veintitrés (2023)**

DEMANDANTE : ELISEO PEREA  
DEMANDADO : ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y  
CESANTÍAS PORVENIR S.A.  
LITIS CONSORCIO NECESARIO: NISSON ANDRES CHAVERRA VALENCIA  
LLAMADO EN GARANTÍA: MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S A  
TIPO DE PROCESO : ORDINARIO  
RADICADO NACIONAL : 05-001-31-05-005-2016-0785-01  
RADICADO INTERNO : 354-22  
DECISIÓN : CONFIRMA SENTENCIA  
ACTA NÚMERO : 023

En la fecha, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL, procede a emitir sentencia de segunda instancia en la que se estudia el recurso de apelación, en el proceso de la referencia. La Sala, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado por el ponente, Doctor HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ, que a continuación se traduce en la siguiente decisión:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la ley 2213 del 13 de junio de 2022, la providencia en segunda instancia se profiere escrita.

**ANTECEDENTES**

Pretende la parte accionante se DECLARE que el señor Eliseo Perea tiene derecho al 50% de la pensión de sobrevivientes en calidad de compañero supérstite de la causante Sorangel Valencia por haber convivido por más de 5 años y hasta el día de su fallecimiento, que a partir de 17 abril 2010 Porvenir S.A. deberá reconocer el derecho pensional con el respectivo retroactivo y que como consecuencia, se CONDENE a Porvenir a la pensión de sobrevivientes y las mesadas atrasadas a partir del 17 de abril de 2010, el reajuste o incremento de ley correspondiente, la indexación, los interés moratorios y las costas del proceso.

Basa su derecho, en que el día 17 de abril de 2010 falleció la señora Sorangel Valencia Córdoba por una falla en la prestación del servicio médico

en CAPRECOM Y LA CLÍNICA VIDA. Que el señor Eliseo fue compañero permanente por más de 5 años continuos de la causante, esto es, desde diciembre de 2004 hasta el día de su fallecimiento. Que el demandante era el padre del bebé que estaba por nacer. Qué a la fecha de su fallecimiento la causante cumplía con el requisito del artículo 46 de la ley 100 del 1993 y estaba afiliada a pensiones y cesantías Porvenir S A. Qué en su condición de compañero permanente el día 28 de agosto 2014 solicitó reconocimiento y pago del 50% de la pensión de sobrevivientes a la que tenía derecho y que a la fecha de presentación de la demanda han transcurrido más de 18 meses sin que la accionada se haya manifestado.

En autos del 26 de febrero de 2019 y del 25 de noviembre de 2019 (fls 69 y 92 del expediente digital 02) se ordenó el emplazamiento de la sociedad Porvenir S.A. y del Sr. Sergio Andrés Díaz Quintero y se les nombró curador ad litem.

### **RESPUESTA A LA DEMANDA**

La sociedad administradora de fondos de pensiones y cesantías Porvenir S.A al contestar la demanda señaló qué no es cierto que el demandante conviviera con la fallecida al momento de su deceso. Que es cierta la fecha de fallecimiento de la afiliada, al igual que la afiliada dejo causada la pensión de sobreviviente al menor Nisson Andrés Chaverra Valencia y qué la aseguradora le dijo al demandante que era necesario un pronunciamiento de la justicia ordinaria laboral. Se opone a las pretensiones y propone como excepciones de mérito imposibilidad de definir el derecho, buena fe de la entidad demandada, prescripción y compensación pruebas expediente. (E.D. 01 fls. 81 a 109)

La LLAMADA EN GARANTÍA MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S A contesta los hechos señalando que no le consta que la señora Sorangela Valencia Correa hubiera fallecido el 17 de abril de 2010, ni las causas del deceso. Que debe probarse que el señor Eliseo fuese compañero permanente de la señora Valencia, pues no le consta si hicieron vida marital ni por cuánto tiempo. En lo demás no le constan ninguna de las afirmaciones realizadas en la demanda. Se opone a qué se le entregue el derecho a la pensión reclamada. Propone como excepción: La falta de legitimación en la causa por activa, el cumplimiento oportuno de las obligaciones de la AFP y de Mapfre y la de prescripción.

El Juzgado de conocimiento ordenó vincular al proceso al menor Nisson Andrés Chaverra Valencia, en calidad de litis consorcio necesario por pasiva. (expediente digital 01).

En la respuesta a la demanda del Sr NISSON ANDRES CHAVERRA VALENCIA (Exp D. 01 fls. 2 a 5) señala ser hijo de la causante Sorangel Valencia Córdoba, quien murió cuando tenía 8 años y que le cuentan que Eliseo Perea era compañero permanente de su madre, que es cierto la reclamación realizada por parte del demandante, lo demás no le consta. No se opone a las pretensiones, pero se debe demostrar el tiempo de convivencia del actor. Como excepciones de mérito propuso la prescripción.

Dentro del proceso se ordenó la reconstrucción de la audiencia de conciliación, resolución de excepciones previas, saneamiento, fijación del litigio y decreto de pruebas celebrada el 3 de octubre de 2022.

### **SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA**

En sentencia del 18 de noviembre de 2022, el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín, DECLARÓ probada la excepción de INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN formulada por la AFP Porvenir y la aseguradora MAFRE COLOMBIA SEGUROS S.A, absolvió a las accionadas de todas las pretensiones incoadas por ELISEO PEREA y condenó en costas al demandante

### **IMPUGNACIÓN**

**El apoderado de la parte demandante** apela la decisión de primera instancia, por considerar que el numeral a) del art 47 de la ley 100 de 1993 modificado Ley 797 de 2003, se encuentra vigente y por ello no se requiere los 5 años de convivencia para el afiliado, es solo para el pensionado dicha carga. Frente a la convivencia, hay dos declaraciones extrajuicio de la Sra. Rufa Herrera y el sr Nicolás dan cuenta de la convivencia de 5 años frente a las testigos a las cuales el juzgado no se pronunció. Solicita sea revocada la sentencia y en su lugar se reconozca las pretensiones iniciales.

### **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**

La parte demandada **MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS SA**, como alegados de conclusión, indica lo siguiente:

Que da por acertada la decisión de fondo emitida por el juzgado en primera instancia, por la cual considera debe ser confirmada en su integridad. Se cita la fijación del litigio del presente proceso con el fin de recordar la razón del mismo; tomando en consideración lo anterior, se tiene que en efecto según el acertado análisis que de las pruebas recaudadas en sede de primera instancia realizó el a quo, el señor ELISEO PEREA en su calidad de demandante, a pesar de corresponderle la carga, no logró acreditar la convivencia que adujo existió entre éste y la afiliada SORANGEL VALENCIA CÓRDOBA, para hacerse al reconocimiento de la pensión perseguida por tal.

Se destaca que, del juicioso análisis del interrogatorio de parte practicado al actor, en conjunto con la prueba testimonial recaudada a instancia de esa parte, no se logró generar el real convencimiento del contorno real de la convivencia de la que se adujo su existencia, no siendo por tanto posible para el fallador encontrarla acreditada.

Este análisis, se extendió además a la prueba documental allegada a instancia de la AFP PORVENIR y de MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A. que, en suma, permitieron desvirtuar las simples afirmaciones carentes de respaldo, contenidas en la demanda.

En este punto, es necesario señalar que los requisitos para obtener la pensión de sobreviviente, hallan su fundamento jurídico en el artículo 46 y 47 de la Ley 100 de 1993 (Modificada por la Ley 797 de 2003); de lo que es dable concluir que el aquí demandante, simple y llanamente no cumple los requisitos para constituirse beneficiario de la misma.

Aunado a esto, quedó acreditado en el plenario que el beneficiario del 100% de la pensión de sobreviviente de la afiliada, es el hijo de ésta NISSON ANDRES CHAVERRA y que, como tal, tanto la AFP PORVENIR como mi representada dieron cabal cumplimiento a las obligaciones emanadas de la

ley y del contrato de seguro previsional, éste último, fuente de vinculación de MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A. al presente proceso.

Por lo anterior indica que quedó acreditado que la afiliada no convivía con persona alguna para la fecha en que ocurrió su fallecimiento. Se trae a colación, algunos argumentos que conllevan a desvirtuar el dicho del demandante y que, consecuentemente dejan sin piso sus pretensiones, a saber:

1. Las declaraciones extra juicio rendidas por los señores JAMER AGUSTIN CHAVERRA, IVAN DARIO PANIAGUA y TERESA DE JESUS VALENCIA.
2. La oportunidad en el reclamo del padre del menor y, el lapso transcurrido entre el fallecimiento de la afiliada y el primer acto de reclamación ejercido por el hoy demandante.
3. El estudio realizado por la firma LEÓN Y ASOCIADOS.
4. La denuncia del fallecimiento de la afiliada por parte del padre del hijo.
5. Certificación emitida por COOMEVA EPS (afiliada era madre cabeza de hogar).
6. La empleadora de la afiliada, APUESTAS UNIDAD DEL CHOCÓ pagó las prestaciones laborales a la madre de la afiliada.

Que por lo anterior no podrá ser de acogido el argumento en que sustentó el recurso de alzada el actor, relativo a la indebida interpretación que hiciera el a quo del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003.

En caso de que se profiera una sentencia condenatoria, siendo necesario resolver la pretensión invocada por la AFP PORVENIR en contra MAPFRE, deberá tener en cuenta el despacho que MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A. ha dado pleno cumplimiento a las obligaciones que en su cabeza radican y que emanan del contrato de seguro suscrito con la AFP demandada.

En todo caso, cualquier decisión que sobre este particular se adopte, deberá sujetarse a las condiciones generales, particulares, límites y exclusiones

pactadas en el contrato de seguro previsional de invalidez y sobrevivientes # 9201410004634.

Por todo lo anteriormente expuesto, se solicita al despacho CONFIRMAR la sentencia de primera instancia, condenando en costas al actor.

Por otro lado, el demandado **PORVENIR SA**, solicita se confirme la sentencia de primera instancia en virtud de que el señor Eliseo Perea, no comprobó de manera contundente el requisito de convivencia con la Señora Sorangel Valencia Córdoba de conformidad con el artículo 47 y 74 de la ley 100 de 1993, disposiciones modificadas por el artículo 13 de la ley 797 de 2003, disposición vigente al momento de la muerte de la señora Valencia Córdoba.

En el presente caso no podrá desconocerse que HORIZONTE S.A. hoy PORVENIR, a través MAPFRE S.A. encontraron como único beneficiario de la prestación de sobrevivientes causada por la muerte de la afiliada al joven NISSON CHAVERRA VALENCIA, hijo de la señora SORANGEL, pues no hubo reclamación de otro posible beneficiario de igual o mejor derecho sino hasta 4 años y 3 meses después, por parte del demandante.

Que con la prueba documental allegada al plenario es claro que entre el señor ELISEO PEREA y la señora SORANGEL VALENCIA no hubo convivencia en los extremos que exige el literal a) de la disposición antes referida, pues en las investigaciones administrativas los declarantes hermanos y madre de la fallecida indicaron que la relación de convivencia entre el demandante y la fallecida si existió, pero por lapso menor al exigido en las normas que gobiernan este asunto.

Reitera las conclusiones que dejó la investigación administrativa realizada por PORVENIR SA, toda vez que las personas allegadas a la fallecida indicaron en sede administrativa que el estado civil de la señora SORANGEL al momento de siniestro era el de soltera, igualmente; se cuestiona lo aducido por el demandante, pues los tramites de registro de la muerte fue realizado por su excompañero permanente, igualmente, las prestaciones sociales de la fallecida fueron reclamados por la madre de la señora VALENCIA CÓRDOBA y los gastos fúnebres, fueron cubiertos por la

empresa en la que laboraba, distinto a lo que se quiso hacer ver en el desarrollo de la diligencia de primera instancia.

Que del interrogatorio de parte practicado al actor, se obtuvieron confesiones que llevaron al juez de primera instancia a tomar la decisión de absolución en favor de PORVENIR, y que si bien existió una relación de convivencia entre el actor y la fallecida, la misma no cumplió el termino de 5 años anteriores a la fecha de muerte de la señora Valencia Córdoba que para el caso particular seria desde el 17 de abril de 2005 al 17 abril de 2010, fecha de muerte de la afiliada, pues indica que el mismo demandante indicó que solo hasta el año 2007, se estableció en relación de pareja con la señora SORANGEL, también, contrastando la información que refiere a las edades de sus hijos y del hijo de la señora VALENCIA CÓRDOBA cuando adujo que inicio la relación con la fallecida, se logra establecer que no se cumplen entre el actor y la afiliada el termino de los 5 años de convivencia exigidos para reconocer la prestación en discusión.

De conformidad con las normas antes citadas, se debe resaltar que el requisito de convivencia se hace necesario para reconocer pensión de sobrevivientes que aquí se reclama, más si se tiene en cuenta la postura trazada por la Corte Constitucional en sentencia del 21 de mayo de 2021 SU 149, mediante la cual se estableció para estos asuntos que el requisito indispensable es demostrar la convivencia de por lo menos 5 años anteriores a la fecha de siniestro con el afiliado o pensionado.

Frente a la testigo FABIOLA VALENCIA CÓRDOBA indica que se logra establecer que la misma es una tercera ajena al objeto de la litis, pues su declaración se basó en suposiciones o apreciaciones que distan de la realidad ocurrida pues pocas certezas dieron frente al objeto de la litis, esto es, la probanza de que el demandante y la fallecida convivieron de forma permanente ininterrumpida, durante los 5 años inmediatamente anteriores a la fecha de muerte de la señora SORANGEL.

Por lo tanto, al tenor del artículo 167 del C.G.P. el demandante tenía la carga de la prueba y con la arrimada al despacho, además de la practicada en primera instancia, se logró demostrar que no se cumplió los presupuestos legales establecidos en los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993,

modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, para acceder a la prestación económica que deprecó.

En caso de que se acceden a las pretensiones de la demanda se solicita, se **EXTIENDAN** los efectos jurídicos de la sentencia condenatoria a la aseguradora con la cual se contrató la póliza para cubrir dichos siniestros de sobrevivencia, pues de conformidad con los artículos 70 y 77 de la Ley 100 de 1993, MAPFRE deberá concurrir a responder por las condenas que se despachen en contra de **PORVENIR**, en virtud de la póliza y porque además es quien paga a través de renta vitalicia las mesadas pensionales al joven **NISSON CHAVERRA VALENCIA**.

Igualmente, y en caso de revocar la decisión de primera instancia, se solicita, se de aplicación al fenómeno de prescripción y se autorice a **PORVENIR** a descontar del retroactivo concedido los aportes a seguridad social en salud, pues es una obligación legal que no puede desconocerse, teniendo en cuenta que **PORVENIR** actuó conforme a la ley y la constitución, encontrando que el único beneficiario que acreditó la calidad de beneficiario de la pensión que se discute es el hijo de la fallecida y quien disfrutó el 100% de la prestación desde enero de 2012.

Por su parte, **el demandante ELISEO PEREA**, indica que la sentencia se limitó a decir que no le asistía el derecho de beneficiario de la pensión de sobreviviente al demandante, por cuanto no había demostrado los cinco años de convivencia con **SORANGEL VALENCIA CARDONA**.

Con dicha argumentación se aparta de la exigencia que hace el artículo 47 de la ley 100 de 1993, modificado por la ley 797 de 2013, artículo 13, cuando dice que son sobrevivientes “En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga treinta o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o compañero permanente, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco años continuos con anterioridad a su muerte”.

Se sostiene que se apartó por cuanto no se tuvo en cuenta la verdadera condición del demandante como beneficiario, y que es claro que la causante no era pensionada, que era una trabajadora activa, que para la fecha de su



fallecimiento convivía con el demandante y tenía cincuenta semanas o más cotizadas en el sistema general de seguridad social, en razón de que para la fecha del fallecimiento del causante el señor ELISEO PEREA tenía más de treinta años cumplidos; como en este caso la causante era trabajadora activa, la primera parte del artículo 47 de la ley 100 de 1993, anteriormente citado, es la aplicable; la segunda parte del artículo 47 no se aplica en cuanto la causante es una trabajadora activa, por lo cual cumple con los requisitos de ley para que el demandante sea su beneficiario.

Se argumenta que lo anterior encuentra su fundamento en una línea jurisprudencial:

1. C 1094/2003 de la CC señaló que el régimen de convivencia mínima solo se fija para el caso de sustitución pensional, cuando se causa por la muerte del pensionado. Adicionalmente, argumenta que la norma pretende es evitar las convivencias de última hora con quién está apunto de fallecer.
2. Las sentencias SL 32393/2008, SL 793/2013 y SL347/2019 de la CSJ muestra que en un primer momento se consideró que independientemente si el causante de la prestación es una afiliado o pensionado, es necesario acreditar la convivencia mínima de cinco años para ostentar la calidad de beneficiario de la pensión de sobrevivientes.
3. Posteriormente en la sentencia SL 1730/2020 se plantea una nueva línea jurisprudencial frente a la correcta interpretación de lo dispuesto en el literal a) del artículo 13 de la ley 797/2003 a la luz del precepto constitucional de *in dubio pro operatio*. Concluye que, para ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes en condición de cónyuge o compañero permanente del afiliado que fallece, no es exigible ningún tiempo mínimo de convivencia toda vez que, con la simple acreditación de la calidad exigida, con vocación de permanencia, vigente para el momento de la muerte, se da cumplimiento al supuesto previsto en el literal de la norma.

Se solicita que en caso tal de considerar que se deben demostrar los cinco años de convivencia del beneficiario y la causante, se considera que los mismos están demostrados en el proceso, porque el demandante argumentó y demostró que por su condición de soldado profesional le tocaba trasladarse de un lugar a otro, lo que nunca impidió su convivencia con la

señora SORANGEL VALENCIA CORDOBA, pero no tiene claro el tiempo en que lo hicieron. La señora RUFA HERRERA y el señor NICOLAS MOSQUERA ROMANA aseveran que la pareja convivio en unión libre por más de cinco años, declaraciones estás que no han sido desmentidas.

Por otra parte, la demandada, los llamados en garantía y el juez en primera instancia se apoyaron en sus alegatos y fallo en lo referente a declaraciones extra-juicio de unas personas que desconocen al demandante y existen dudas si conocían a la causante; además de que algunos de ellos ni siquiera viven en el Chocó, de igual manera nunca se les citó para que ratificaran bajo gravedad de juramento lo declarado, por lo que se solicita sean llamadas para que ratifiquen su declaración. Se especifican los nombres de estas personas en el siguiente orden: SONIA ARROYO CAICEDO, JULIA IRENE PALACIOS CHAVERRA, TERESA DE JESUS VALENCIA MILLAN, IVAN DARIO PANIAGUA AGUDELO y CRCENCIA CORDOBA PEREA.

Por todo lo anterior, se solicita ante la sala REVOCAR el fallo en primera instancia y acoger las pretensiones propuestas por el demandante ELISEO PEREA.

### **PRONUNCIAMIENTO JURÍDICO**

El problema jurídico se centra en determinar si Sr. ELISEO PEREA tiene derecho al 50% del reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente por la muerte de la Sra. Sorangela Valencia Córdoba, al retroactivo y los intereses moratorios, conforme el artículo 47 de la ley 100 de 1993.

Está probado que:

- a. El 1 de noviembre 2005 la señora Sorangela Valencia Córdoba suscribió formulario de vinculación a Porvenir a partir del 2 de noviembre 2005. (Expediente digital 01 fl. 58)
- b. La señora Sorangela Valencia Córdoba falleció el 17 de abril de 2010. (Registro Civil de defunción 01 fl. 15)
- c. Que el señor James Agustín Chaverra se presentó a reclamar pensión de sobrevivientes en representación de Andrés Chaverra Valencia.
- d. Qué en los tres años anteriores a su fallecimiento la Sra. Sorangela cotizó un total de 154.28 semanas cumpliendo el requisito de las 50

semanas cotizadas para Acceder al beneficio de la pensión (E.D. 01 fls 169 y siguientes).

- e. Que la pensión fue reconocida a Nisson Andrés Chaverra Valencia a partir del 13 de enero de 2012.
- f. Que el pago de la pensión está a cargo de MAFRE S.A.
- g. Que el sr Eliseo Perea se presentó a reclamar el 50% de la pensión de sobrevivientes en el año 2014.
- h. Igualmente está claro que la Sra. creencia Córdoba Perea reclamó las cesantías a favor del Nisson Andrés y
- i. El auxilio funerario fue cancelado a la empresa apuestas unidas del choco.

Conforme lo anterior pasa la Corporación a analizar el problema jurídico:

### **1. Del requisito de las semanas**

En el presente caso, se tiene claro que al haber fallecido la Sra. Sorangela Valencia Córdoba el 17 de abril de 2010, por lo tanto, la normatividad aplicable al caso concreto es la vigente al momento de la muerte del causante, esto es, el art. 46 de la Ley 100 de 1993 modificado por el art. 12 de la Ley 797 de 2003, el cual señala:

*“REQUISITOS PARA OBTENER LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES. Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes: (...) 2. Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando éste hubiere cotizado **cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento** (...).”*

Una vez revisada la prueba aportada al proceso se encuentra que la causante cotizó al RAIS desde el **1º de noviembre de 2005 al 17 de abril de 2010**, un total de 154.28 semanas cumpliendo el requisito de las 50 semanas cotizadas para Acceder al beneficio de la pensión (E.D. 01 fls 169 y siguientes).

Ahora bien, solicita el apoderado de la parte demandante en el recurso de apelación se reconozca la pensión de sobreviviente al demandante en aplicación del art. 47 de la ley 100 de 1993 que reza:

*“Artículo 47: Son beneficiarios... a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se*

cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente superviviente, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y **haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte. (...)**

Al respecto debe señalarse que la Corte Suprema de Justicia antes de la sentencia SL 1730-2020, no existía diferencia entre el afiliado y el pensionado en cuanto a los 5 años de convivencia, línea jurisprudencial que fue desarrollada entre otras sentencias, como SL831-2020, SL347-2019, SL3468-2018, SL14068-2016, entre otras. La Corte Suprema se fundamentaba en que no hay razones válidas para establecer diferencias entre los beneficiarios de un pensionado y de un afiliado, puesto que, conforme con lo expuesto en sentencias como la SL14068-2016 y la SL3468-2018, la voluntad del legislador nunca estuvo dirigida a fijar algún tipo de diferenciación entre estos beneficiarios.

La sentencia SL 1730-2020 cambia el criterio en cuanto a la concesión de la pensión de sobrevivientes para los casos en los que esta prestación es causada por un afiliado al SGSSP; en esta sentencia, la Corte Suprema aboga por mantener para los beneficiarios de una pensión de sobrevivientes el mismo nivel económico y grado de seguridad social que tuvieron en vida del causante afiliado, que al desconocerse podría llevar a una evidente desprotección. Invoca la sentencia C-1094-2003, en la que la Corte Constitucional, cuando realiza el estudio de la constitucionalidad de los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, señala que:

...la norma persigue una finalidad legítima al fijar requisitos a los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, lo cual no atenta contra los fines y principios del sistema. En primer lugar, el régimen de convivencia por 5 años sólo se fija para el caso de los pensionados y, como ya se indicó, con este tipo de disposiciones lo que se pretende es evitar las convivencias de última hora con quien está a punto de fallecer y así acceder a la pensión de sobrevivientes.

La Corte Constitucional a propósito de la sentencia SL1730 de 2020 sobre el requisito de convivencia para el afiliado, en la sentencia SU-149 de 2021, señala que la postura de la Corte Suprema de Justicia incurre en defecto sustantivo al realizar una interpretación irrazonable y desproporcionada de la norma, pues si bien en un principio la interpretación de la Corte Suprema es viable al hacer una interpretación textual de la norma, se consolida como una interpretación contraria a los principios de igualdad y de sostenibilidad

financiera del sistema pensional. Igualmente expone que el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes sin exigir un tiempo mínimo de convivencia, puede llegar a ser lesivo para los demás beneficiarios de esta prestación, pues al estar los hijos del causante en el mismo orden de prelación que los cónyuges o compañeros permanentes podrían ver el monto de su prestación reducido; y para aquellos beneficiarios que se encuentran en los demás ordenes, la afectación recae en que estos solo podrían acceder a la pensión de sobrevivientes a falta de hijos o cónyuge y compañeros permanentes con derecho.

Afirma la Corte Constitucional que el precedente valido para resolver el caso en concreto es el señalado en la sentencia SU-428 de 2016, dado que, en dicho pronunciamiento se fija una regla jurisprudencial en cuanto a que los beneficiarios del afiliado, en términos del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, deben acreditar 5 años de convivencia con su causante.

Concluye que los principios de igualdad y de sostenibilidad financiera del sistema imponen una lectura específica sobre el requisito de convivencia para el reconocimiento de pensión de sobrevivientes, de tal forma que, este requisito debe ser exigible tanto a los beneficiarios del pensionado como del afiliado.

Por lo anterior, la Corte Suprema de Justicia, dando cumplimiento a lo ordenado por la Corte Constitucional, emite la sentencia SL4318-2021, en la que advierte que, contrario a lo expuesto en la sentencia SU-149 de 2021, nunca se incurrió en una interpretación irrazonable o desproporcionada del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, puesto que es una postura que vela por la protección del núcleo familiar del afiliado que fallece, cumpliendo así la finalidad de la pensión de sobrevivientes, sin embargo, en acatamiento a lo ordenado por el Tribunal Constitucional ajusta su providencia, y casa la sentencia de tal forma que no se hacen reconocimientos de prestaciones pensionales a aquellos cónyuges o compañeros permanentes que no acrediten una convivencia mínima de 5 años con el causante.

Pese a que actualmente en algunas providencias la Corte suprema de justicia ha mantenido la posición esgrimida en la SL 1730 de 2020 (verbigracia la SL. 2222/21, SL. 973/22) y en otras no, esta sala es respetuosa del precedente judicial constitucional, por lo siguiente:

En sentencia SU-354 de 2017 la Alta Corte afirmó que el precedente judicial es “la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado que, por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo”. Por lo anterior, se puede inferir que cuando hablamos de precedente judicial, se refiere a una parte de la jurisprudencia que trata sobre casos determinados.

En cuanto a los efectos del precedente judicial, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 243 superior al indicar que “Los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional”, por lo que, conforme con la sentencia C-539 de 2011, dichos fallos son obligatorios para todas las autoridades públicas, y su parte considerativa es vinculante para fundamentar un fallo.

Las pautas jurisprudenciales fijadas por la Corte, la cual tiene a su cargo la guarda de la integridad y supremacía de la Carta Política, determinan el contenido y alcance de la normatividad fundamental, de tal manera que cuando es desconocida, se está violando la Constitución, en cuanto la aplican de manera contraria a aquélla en que ha sido entendida por el juez de constitucionalidad.

En conclusión, a partir de que fue ordenada la corrección de la sentencia SL 1730 de 2020 mediante la sentencia SU 149 de 2021 y la misma fue realizada por la Corte suprema de justicia entre otras en la sentencia SL4318-2021 y dado que el precedente constitucional es erga omnes, la posición del Tribunal es que se debe acreditar la convivencia de 5 años exigida por el artículo 47 de la ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la ley 797 de 2003 para afiliados y pensionados del sistema de seguridad social.

## **2. Del requisito de la convivencia**

Por lo anterior se analizará si el SR ELISEO PEREA cumplió con el requisito de los 5 años de convivencia con la causante SORANGELA VALENCIA CORDOBA.

Es claro que en el Registro civil de defunción no hay nota marginal de matrimonio, por tanto, se trata el caso de un compañero permanente.

La prueba testimonial es nimia por cuanto sólo declaró la Sra. Fabiola Valencia Córdoba, hermana de la causante y quién se observó clara y transparente en testimonio, en síntesis señaló: que al momento del fallecimiento de Sorangela convivía con el Sr PEREA y en cuanto a la convivencia fue clara en señalar que no precisaba desde cuándo porque Sorangela vivía en Villanueva Bojayá, pero que no mucho tiempo, como un año porque se comunicaban mucho y la testigo bajaba periódicamente cada 6 meses o un año allí. Que al Sr Perea se lo presentó la causante en junio-julio de 2008 como su novio, en unas vacaciones que ella estuvo. Que sabe que el Sr. Pérez tenía unos hijos y no sabe si convivía con la mamá de los hijos. Que cuando fue la última vez a Villanueva, el hogar lo componían Sandra su hermana y 3 hijos, sorangela y no estaba Eliseo, supone trabajando. En diciembre de 2009 se reunieron y estaba vigente la relación. Señala los últimos días de sorangela en la clínica vida, la remisión a san francisco y al quirófano, que Eliseo no estuvo allí, pero hizo una llamada. Eliseo estuvo en el funeral. Los gastos del hogar lo asumían las hermanas, pero no sabe si Eliseo asumía algo.

Al respecto hay que señalar que en el informe de investigación para el pago de prestaciones económicas de León asociados para la aseguradora que concluyó que el Sr. Eliseo Perea convivió con la Sra. Sorangela menos de 5 años (E.D. 01 fls. 102 y sig)) la testigo Fabiola Valencia, así como Yofre Valencia, hermanos de la causante y la madre Sra. Crecencia Córdoba había señalado que la convivencia de ellos fue de 2 años.

En el interrogatorio de parte de Eliseo Perea manifiesta que conoció a Sorangela en el año 2003 y el 20 de diciembre de 2004 tomaron la decisión de ir a vivir juntos, vivía en el local de la policía, pero almorzaba y comía en la casa de ella, cuando trabaja en Villanueva. Que no hubo separación en 2008 a 2010 pero que por motivos de trabajo lo trasladaban y cuando salía a vacaciones él iba o si no ella iba a Quibdó, manifiesta que él contribuía a los gastos del hogar. Que ellos vivían con una hermana, sus hijos y el hijo Nisson Andrés. Que tardó más de 4 años en reclamar la pensión porque inicialmente quedó muy afectado y el niño estaba muy pequeño y porque que el papá de Nisson no le estaba dando lo suficiente al hijo y sus abuelos. Que los gastos funerarios asumieron todos en familia. Que la relación con Sorangela era pública. A la pregunta de porque razón dejó que Jamer Agustín y Ana Crecencia q eran los representantes legales de Nisson Andrés

reclamaran las prestaciones legales de Sorangela, señalo que porque estaba muy afectado y por su trabajo no tenía mucha disponibilidad. Que de 2004 vivían en Villavista viejo, luego 2007 hasta 2010 en el nuevo Villavista. Que cuando ella falleció él estaba en una base llamada montesuma, primero lo llamó Fabiola y le dijo que el niño nació muerto y a la media hora le avisaron de la muerte de ella. Que tiene 3 hijos de 20 años, 18 y la niña 21 años. Que ella no estaba como beneficiaria suya porque ella tenía su trabajo y pese a señalarle que el auxilio funerario fue reconocido por la empresa ayudas unidas, señala que dio una plata para eso.

Es claro que la prueba del interrogatorio de parte puede conllevar dos pruebas implícitas; la primera la declaración de parte y la segunda la confesión provocada. La primera tendrá en cuenta las afirmaciones que estén soportadas en comunidad con otras pruebas y de la segunda tendrá valor lo dicho y le sea perjudicial a sus intereses, por ello pese a la apelación del apoderado del aparte actora señalar que se le de credibilidad a lo dicho por el interrogado, no son suficiente sus afirmaciones sino que se debe confrontar lo dicho con la comunidad de la prueba declarada y practica en el proceso y darle validez en lo que le sea contrario a sus intereses.

En cuanto a las declaraciones extraproceso de NICOLAS MOSQUERA ROMAÑA RUFA HERRERA DE PEREZ (E.D 01 fls. 11 y 12) echadas de menos por el apelante, que señalan que entre la Sra. Sorangela Valencia y el St. Eliseo Perea existió una unión marital de hecho por mas de 5 años, desde diciembre de 2004 hasta el 17 de abril de 2010 debe decirse lo siguiente.

Para analizar las declaraciones extrajuicio antes mencionadas, resulta necesario traer a colación lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil en sentencia del 5 de mayo de 1999, citada en reciente sentencia SC795 del 15 de marzo de 2021 radicación 68679-31-84-002-2013-00027-01, donde se han trazado algunas pautas para orientar el análisis crítico de la prueba testimonial de la siguiente forma:

*“Entre los diversos aspectos a cuyo análisis debe dedicarse el juez para ponderar la eficacia probatoria del testimonio se encuentran algunos de naturaleza subjetiva, que le permitan establecer la idoneidad del testigo para rendir declaración judicial, aptitud que debe enjuiciarse, entonces, desde dos ópticas claramente definidas por el legislador: de un lado, la habilidad fisiológica del declarante para percibir los hechos sin equivocarse, requerimiento este que habrá de conducirlo a rechazar ab-initio el testimonio de las personas previstas en los artículos 215 y 216 del Código de Procedimiento Civil, amen que lo impulsara a cerciorarse de*



*las condiciones sensoriales de los deponentes; y, de otro lado, a determinar su idoneidad moral, particularidad que debe apremiarlo a examinar con mayor celo el dicho de quienes se encuentren en cualquier situación que los tome proclives a engañar, mentir, circunstancias estas que, valga la pena anotarlo, puede ser, según lo prevé el artículo 217 ejusdem, de muy variada índole.*

(...)

***De igual modo, cuando algunas expresiones y precisiones se repiten mecánicamente en varios testimonios, podrá colegir el juzgador cierto afán de los deponentes por narrar un libreto preestablecido, ocurrencia que les podría restar crédito habida cuenta que esa “identidad de inspiración” o concordancia entre los testigos es, en verdad, inusitada. También estará atento a las vacilaciones o turbaciones del declarante, pues ellas suelen obedecer al temor a ser descubierto, a no contradecirse, nada de lo cual suele acontecer cuando se dice con la verdad. (...) (SC012-1999, del 05 de mayo de 1999, rad Nro 4978)”. (Resalto de la Sala).***

Por lo anterior, si la esencia de las declaraciones es determinar la veracidad de las afirmaciones, en palabras jurídicas la razón de la ciencia del dicho, esto es las circunstancias de tiempo, modo y lugar, estas pruebas no pueden ser tenidas en cuenta por carecer de ellas.

En conclusión de la valoración probatoria conforme los criterios de la sana crítica, previsto en el artículo 164 y 167 del CGP aplicables al proceso laboral y de la seguridad social, se concluye sin dubitación alguna que, a pesar de que el Sr Pérez convivió con al Sra Sorangela Valencia Córdova y que lo hacía al momento del fallecimiento de la causante, no se proaron los 5 años de convivencia exigidos por la ley y la jurisprudencia, siendo el único beneficiario de la pensión de sobrevivientes el Sr. Nisson Andrés, por lo siguiente:

El Testimonio de Fabiola Valencia, que fue claro y objetivo señala que la convivencia se produjo por corto tiempo, indicando que aproximadamente un año, pues al Sr Perea se lo presentó la causante en junio-julio de 2008 como su novio, en unas vacaciones, siendo clara que su hermana vivía hacia 6 años en Bojayá y ella iba en vacaciones, es decir, cada 6 meses o cada año, lo cual da credibilidad que antes de eso no convivía la causante con el Sr. Perea.

Del interrogatorio del Sr. Eliseo Perea se observa serias contradicciones con lo referido por Fabiola, dado que señala que el 20 de diciembre de 2004 empezaron a vivir juntos, pero su explicación era que dormía en la estación de la policía pero almorzaba y comía en la casa de ella, lo que no permite

derivar un ánimo de convivencia de ser cierto entre el año 2004 a 2008, más cuando no se da explicación alguna de cómo era la ayuda de él para los gastos del hogar. Situación que se complica aún más cuando señala que de 2008 a 2010 por motivos de trabajo lo trasladaron y cuando salía a vacaciones él iba o si no ella iba a Quibdó. Igualmente, si la relación con Sorangela era pública, porque en la investigación arriba mencionada, los declarantes sólo la limitaron a 2 años, quedando el proceso huérfano de prueba testimonial del demandante que informara sobre este importante hecho.

Pero igualmente restan credibilidad afirmaciones del accionante como que tardó más de 4 años en reclamar la pensión "...porque inicialmente quedó muy afectado y el niño estaba muy pequeño..", cuando las reglas de la lógica y la experiencia nos informan que una persona de las calidades del Sr Eliseo soldado profesional y frente a las circunstancias de que la convivencia llevaba más de 5 años, no se apropie de un derecho que la experiencia enseña es de meses su reclamación y frente a la razón de que se decidió a reclamar porque el papá de Nisson no le estaba dando lo suficiente al hijo y sus abuelos, no existe prueba y es razón que no fue señalada por la testigo del proceso y no siendo lógico que no siendo su hijo, mas de 4 años se decidiera reclamar sin fundamentar porque sabía que el padre de Nisson no le daba lo suficiente.

También resta credibilidad el señalar que los gastos funerarios lo asumieron todos en familia, aun él. Lo que no señaló la testigo Fabiola Valencia y fue demostrado en el proceso que la familia no pago esos gastos, ya que lo hizo la empresa ayudas unidas, donde laboraba la causante. Igualmente, no es creíble que si eran unidos por convivencia porque se despreocupó y dejó que Jamer Agustín, papá de Nisson y Ana creencia madre de la causante reclamaran las prestaciones legales de Sorangela, su supuesta compañera permanente.

Aunado a lo anterior, manifestó que tiene 3 hijos de 20 años, 18 y la niña 21 años, es decir, sus hijos nacieron 2002 Juan Sebastián 2005 - 2006 Juan Esteban y 2003 Karen Julieth, y pretende la convivencia con Sorangela desde el año 2005, 2006, 2007, lo cual se antoja extraño más cuando nunca señaló una convivencia con otra persona a la par.

Otra afirmación ajena a lo común, es que el actor no la tenía como beneficiaria suya en su trabajo.

En la documental además obran pruebas en contra de la convivencia, se observa que el registro de defunción fue realizado por el padre de Nisson Andrés. En el certificado de la EPS Coomeva se señala que la sra era madre cabeza de hogar.

Por lo anterior se CONFIRMARÁ la sentencia absolutoria de primera instancia.

Costas en esta instancia, a cargo del Sr. Eliseo Perea, en la suma de \$1.000.000 en total y a favor de Porvenir S.A., NISSON ANDRES CHAVERRA VALENCIA Y MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S A, por no haber salido avante el recurso interpuesto.

### **DECISIÓN**

En mérito de lo expuesto, la SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

### **RESUELVE:**

**PRIMERO: CONFIRMAR** en su integridad, la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín, de conformidad con la parte motiva de la presente providencia.

**SEGUNDA:** Costas en esta instancia, a cargo del Sr. ELISEO PEREA, en la suma de \$1.000.000 en total y a favor de Porvenir S.A., NISSON ANDRES CHAVERRA VALENCIA Y MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S A, por no haber salido avante el recurso interpuesto.

Las anteriores decisiones se notifican por EDICTO.

Los Magistrados.



**HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ**

Radicado Único Nacional 05-001-31-05-005-2016-0785-01  
Radicado Interno 354-22



**GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ**



**CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA**



**SECRETARÍA SALA LABORAL**  
**EDICTO VIRTUAL**

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

DEMANDANTE	: MARÍA NINFA MENA RAMÍREZ
DEMANDANTE	: ELISEO PEREA
DEMANDADO :	: ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.
LITIS CONSORCIO NECESARIO:	NISSON ANDRES CHAVERRA VALENCIA
LLAMADO EN GARANTÍA:	MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S A
TIPO DE PROCESO	: ORDINARIO
RADICADO NACIONAL	: 05-001-31-05-005-2016-0785-01
RADICADO INTERNO	: 354-22
DECISIÓN	: CONFIRMA SENTENCIA

Magistrado Ponente  
**HUGO ALEXANDER BEDOYA DIAZ**

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/148> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

**CONSTANCIA DE FIJACIÓN**

Fijado el 28 de febrero de 2023 a las 8:00am

**CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN**

Se desfija el 28 de febrero de 2023 a la 5:00pm

  
**RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS**  
SECRETARIO